

Audiencia Pública convocada por el ENRE 23 de Enero 2023

Lic Cristian Folgar

cristianfolgar@gmail.com

El objeto de la presente Audiencia Pública es analizar las propuestas que EDENOR y EDESUR presentaron con miras a una adecuación tarifaria transitoria, dentro del proceso de Revisión Tarifaria Integral y con carácter previo a fijar las tarifas definitivas del servicio público de distribución de energía eléctrica.

El tiempo asignado a los expositores en las Audiencias Públicas

Opté por presentar un escrito en lugar de exponer oralmente pues es imposible desarrollar argumentos sobre esta cuestión en 5 minutos. Para hacer una exposición de motivos sería hay que violar la restricción temporal, o para ajustarse a la restricción temporal hay que hacer una exposición desprovista de fundamentos.

Ello atenta contra el objetivo de las Audiencias Públicas. Las Audiencias Públicas tienen como objetivo que los actores involucrados expongan y accedan a información relevante sobre la materia en discusión. Restringir las exposiciones tiene el efecto contrario.

Lógicamente hay que poner alguna limitación, pero cuando las restricciones administrativas alteran el fin de un instituto como el de la Audiencia Pública, lo que debe cambiarse es la restricción administrativa. Asignar tiempos ridículamente bajos a los expositores atenta contra la posibilidad de enriquecer el debate. La necesidad de ordenar el debate no puede tener como contrapartida el empobrecimiento del mismo.

La limitación de 5 minutos por expositor atenta lisa y llanamente contra la calidad de las exposiciones. La limitación es irrazonable en términos prácticos y desvirtúa el objetivo de las Audiencias Públicas.

Entiendo que hacer de manera virtual las Audiencias Públicas facilita la participación de la ciudadanía, con lo cual ello es un valor a preservar. Pero la manera en que las mismas se desarrollan, ¿A quién le sirve?

Quizá, preservando la virtualidad podría diseñarse un mecanismo mas amigable. Podría pensarse en una alternativa de este tipo, o alguna variante del estilo:

- a) El ENRE convoca a la Audiencia Pública. La misma se desarrollará en la fecha determinada de manera virtual con transmisión vía el canal de Youtube de la Secretaría de Energía o del ENRE.
- b) En dicha fecha exponen el ENRE, la/s empresa/s involucrada/s, las asociaciones integrantes el directorio de CAMMESA y las asociaciones de

- consumidores registradas ante el ENRE. Todos con un tiempo prudencial para exponer sus ideas y argumentos.
- c) Todas las exposiciones referidas en b) son publicadas en el canal de Youtube del ENRE o SE. Transcurrido un tiempo prudencial (5 días hábiles) la ciudadanía podría expresar su opinión mediante el envío de videos o presentaciones escritas. El ENRE podría ver/chequear que los videos se refieran a la Audiencia y los va subiendo al canal.
 - d) Luego de un tiempo prudencial (20 días hábiles) se da por cerrada la traducción y transcripción.

Esto ordenaría mejor todo el proceso y facilitaría la participación de muchos ciudadanos

El carácter de las Audiencias Públicas

Las Audiencias Públicas son obligatorias, pero no vinculantes. La realización de Audiencias Públicas es obligatorio para determinadas cuestiones (y entiendo que esta bien) pero lo que surge de ellas es no vinculante, lo cual entiendo que también es constitucionalmente correcto.

El objetivo de las Audiencias Públicas no es votar sobre tal o cual decisión. Es absolutamente irrelevante la cantidad de opiniones en favor o en contra de cualquier tema que se discuta en una Audiencia Pública. El objetivo de las Audiencias Públicas es la de transparentar la información y el debate de cara a la sociedad en general y las partes interesadas en particular. Las Audiencias Públicas no reemplazan a los legítimos representantes del pueblo, no son un plebiscito, ni son un mecanismo de democracia directa (explícitamente prohibido por nuestra constitución excepto en el caso de plebiscitos o consultas populares).

¿Miles de participantes en una Audiencia Pública en favor o en contra de un tema particular tomarían decisiones en nombre de 47 Millones de argentinos? El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Ese es el mandato constitucional. Nuestros representantes han sido elegidos democráticamente y son ellos los UNICOS habilitados constitucionalmente para tomar decisiones legislativas o ejecutivas. Si se va a tener en cuenta la cantidad de opiniones en favor o en contra de cualquier tema hay que llamar a una consulta popular, no a una Audiencia Pública.

Avanzar en el tratamiento de determinados temas SIN la realización de una Audiencia Pública bien podría implicar el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que tomen esa decisión. Ahora bien, intentar convertir una Audiencia Pública en una asamblea en la cual unos cientos o miles de ciudadanos decidan sobre 47 millones también es un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que habiliten tal cuestión, pues se estaría alterando el carácter representativo democrático impuesto por nuestra constitución. No es una cuestión de gustos o preferencias personales. La

Constitución está para ser respetada, convertir una Audiencia Pública en una Asamblea con capacidad de decisión propia es directa y linealmente inconstitucional.

Las Disposiciones del DNU 332/2022

En Junio del año 2022 el PEN dictó el DNU 332 por el cual se implementaba un esquema de segmentación tarifaria. El DNU tiene fuerza de Ley, esta vigente. No fue derogado ni modificado por otra norma de igual o mayor rango. ¿Por qué motivo el propio PEN que dictó el DNU no lo aplica?

¿Cuál era la NECESIDAD de dictar el DNU 332/2022 si nunca se aplicó? Cuando el PEN incumple su propio DNU no solo está violando una ley, sino que está demostrando que el DNU justamente no era necesario.

¿Cuál era la URGENCIA de dictar el DNU 332/2022 si aún no se aplicó en su totalidad? No se entiende cual era el motivo para eludir el funcionamiento del Congreso para emitir una norma con fuerza de Ley si la misma sigue sin aplicarse 6 meses después.

Se puede estar mas o menos de acuerdo con el DNU 332/2022, lo que no puede hacerse es dejar de cumplirlo. Es una Ley (encima dictada como DNU por el propio gobierno que no la aplica) y como tal se cumple hasta que se cambie.

¿En mérito a qué norma el ENRE decide desconocer un DNU dictado por el propio gobierno que encima designó a las autoridades que conducen dicho organismo?

Es una enorme irregularidad institucional que la autoridad regulatoria de un país desconozca las normas de ese país. Es de una enorme desprolijidad de gestión (para decir lo menos) que el gobierno no implemente las políticas que el propio gobierno considera Necesarias y Urgentes.

Es mandatorio que el ENRE (y las autoridades alcanzadas por el DNU 332/2022) cumplan con la norma en cuestión. En su caso, mientras cumplen con la norma, podrán sugerirle modificaciones al PEN o al Congreso Nacional.

En la República Argentina, bajo el imperio de la democracia republicana y federal impuesta por nuestra constitución es cumplimiento de las normas es OBLIGATORIO por los sujetos alcanzados, cualquiera sea la opinión de esos sujetos sobre los contenidos de dicha norma.

El nivel actual de las tarifas eléctricas

Mucho se dirá en el marco de este proceso de Audiencia Públicas sobre el nivel de tarifas eléctricas. El marco regulatorio aplicable por el ENRE sobre EDENOR y EDESUR establece que las tarifas deben ser justas y razonables (lo mismo establecen esencialmente el resto de los marcos regulatorios del país).

Entre otras cuestiones las tarifas justas y razonables deben cubrir el costo económico de prestar el servicio. Este costo económico es determinado y calculado por la autoridad regulatoria respectiva.

El problema en la Argentina es que el propio costo económico determinado por los propios reguladores deriva en niveles tarifarios (y sus consecuentes facturas) que no pueden ser pagadas por un segmento importante de la demanda residencial. No es que los reguladores fijan tarifas injustas e irrazonables, sino que parte de la demanda no tiene ingresos suficientes para pagarlas.

Ante ello muchas veces el regulador (y esta no es la excepción) busca que las tarifas sean mas bajas que los costos económicos para que la demanda con insuficiencia de ingresos pueda pagarlas.

Para ponerlo en términos visuales tenemos un elefante que no pasa por la puerta. En lugar de agrandar la puerta pretendemos achicar al elefante. Esto es lo que muchas veces se hizo en este siglo.

Con muy malos resultados asignativos: subsidios regresivos a la Hood Robin donde las familias de mayores ingresos reciben proporcionalmente más subsidios que quienes lo necesitan.

Con muy malos resultados fiscales: niveles de erogaciones para sostener subsidios que no pueden ser genuinamente financiadas recurriendo a la monetización del gasto con consecuencias inflacionarias.

Con malos resultados sectoriales que derivan en problemas de caja para las distribuidoras eléctricas de capital privado reguladas por Nación (caso Edenor, Edesur), con problemas de caja para las distribuidoras de capital privado reguladas por Provincias (caso Edelap, Eden, Edes y Edea), con problemas de caja para las distribuidoras de capital estatal (caso EPEC o EPE) y con problemas de caja para las cooperativas que prestan el servicio en distintos lugares de nuestro país.

Y todo ello sin solucionar, más bien agravando, la situación del sector de la demanda que no puede pagar las facturas y se intenta proteger.

Como siempre ocurre se cumple un principio económico básico: “La pobreza nunca se reduce convirtiendo también en pobre a la familia del panadero.”

Estos días tuvimos la demostración básica que las tarifas no cubren los costos económicos (es decir no son justas y razonables). El Estado Nacional acordó planes de pago para que las distribuidoras regularicen su situación con CAMMESA

¿Por qué las distribuidoras no podían pagarle el costo de la energía a CAMMESA?

Cabrían dos respuestas. Podían hacerlo, pero desviaron los fondos a otros usos, o no podían pagarle a CAMMESA sin dejar de atender los otros costos de prestación del servicio.

Si las operadoras “desviaron” fondos eso debió ser sancionado por la autoridad regulatoria. Si un agente regulado tiene tarifas que le permiten recuperar los costos, pero no asigna lo recaudado en consecuencia, debe entonces ser sancionado. ¿Cuál es la necesidad de dejar de pagarle a CAMMESA si las tarifas son justas y razonables?

Los reguladores o autoridades concedentes admitieron estos retrasos justamente porque saben que la caja de las empresas no les permitía cubrir todas las erogaciones. Caso contrario los planes de financiación admitidos no tienen sentido. ¿Por qué los contribuyentes deberían financiar a las prestadoras si ellas cobraron los fondos para cubrir TODOS los costos de prestar el servicio?

O las distribuidoras malversaron fondos bajo la pasiva mirada del regulador/concedente, o las distribuidoras tienen problemas de caja derivados de tarifas insuficientes y el regulador/concedente recurre a estos mecanismos para oxigenar la caja de las unidades operativas.

Si descartamos la hipótesis de desvío consentido de fondos entonces arribamos a la lógica conclusión que las tarifas están mal determinadas y que no se cumplió (ni se cumple) con el principio legal que las tarifas deben ser justas y razonables.

El ENRE tiene ante así la oportunidad de fijar tarifas que cumplan con los preceptos legales. De nada sirve engañar a los usuarios con tarifas artificialmente bajas. Durante el tiempo que se acumularon deudas con CAMMESA los reguladores sostenían que las tarifas eran adecuadas. ¿Si lo eran porque no alcanzaban para pagar la energía? ¿Y si eran las adecuadas porque los planes de pago para pagar algo que se cobró? ¿Alguien le avisó a usuarios y contribuyentes que se estaba acumulando una deuda que ellos debían afrontar?

Las consecuencias de malas decisiones tarifarias no las están afrontando quienes firmaron resoluciones tarifarias. Las están enfrentando en primer lugar usuarios y contribuyentes.

Es por ello que el ENRE en esta oportunidad debe volver sobre los principios básicos de cualquier marco regulatorio: fijar tarifas que les permitan a las operadoras recuperar los costos económicos de prestar el servicio. Cualquier otro atajo quizás sea coyunturalmente simpático, pero a la vuelta de la esquina termina perjudicando precisamente a quien se quiere (y debería) proteger: el consumidor.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: FOLGAR Cristian. Presentación. EX-2022-122923139- -APN-SD#ENRE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.